

La Educación no interesa

Ya conocemos el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, en concreto, las cifras que componen la propuesta de Gasto Educativo para el año 97.

En las páginas que siguen encontraréis pormenorizada nuestra valoración del mencionado Proyecto, pero sí debemos destacar algo en este editorial.

Son los predupuestos más regresivos desde la transición política en nuestro país. No es que los Presupuestos diseñados por los últimos gobiernos del PSOE nos pareciesen positivos, todo lo contrario. De hecho es significativa la reducción de gasto introducido por estos gobiernos a partir del año 90, justo en el momento en que el Parlamento aprueba la LOGSE. Pero lo cierto es que los últimos presupuestos educativos venían creciendo, cuanto menos, lo mismo que el conjunto del Presupuesto.

Los actuales rompen esta tendencia. El Presupuesto educativo crece un 0,4% frente a un crecimiento del 1,7% del conjunto.

En segundo lugar, el dato que acabamos de citar nos muestra la importancia que se le da a la Educación dentro de las prioridades del nuevo Gobierno. Lejos de los mensajes preelectorales del actual Presidente del Gobierno, la educación no es una de sus prioridades políticas.

Esta afirmación no es ningún alarde de demagogía, es la constatación de la realidad. La educación es algo que preocupa a toda la sociedad, léase a todos los votantes, y es muy fácil prometer esto y lo otro; pero ha llegado el momento de demostrar hasta dónde se está dispuesto a ir, el momento en que los discursos deben materializarse en compromisos concretos, esto es: los Presupuestos Generales del Estado, ellos son la expresión en cifras de las voluntades políticas.

Y cuando vemos lo que crece este Presupuesto es cuando podemos afirmar que no existe ningún interés del actual Gobierno por la Educación.

En tercer lugar, las opciones políticas que encierran este Presupuesto se hacen patentes al observar cómo se distribuye la escasa cantidad global.

Es aquí donde podemos afirmar que existe un total desprecio por los procesos de reforma en marcha, así como un total abandono de la enseñanza pública y un intento de contentar a los sectores patronales de la enseñanza privada -cuyos intereses no hay que confundir con los de los trabajadores de este sector, que aún tendrán más dificultades, si cabe, para mejorar sus condiciones de trabajo-.

¿En qué basamos esta afirmación? Basta con observar cómo se reducen las plantillas de profesorado; cómo se alarga, sin perspectiva, la continuidad del primer ciclo de la ESO en los centros de primaria; cómo se ponen obstáculos a la introducción de los equipos de orientación en los centros de secundaria; cómo caen los gastos de funcionamiento de los centros; cómo se recortan programas como la formación del profesorado; cómo se suprimen programas de educación compensatoria; cómo se recortan las inversiones en remodelación y nuevas construcciones de centros... y, al mismo tiempo, cómo se detraen 7.000 millones de pesetas para financiar la escolarización de alumnos de tres años en la enseñanza privada, sin que este nivel haya sido considerado obligatorio.

Las consecuencias de esta política son claras –si no evitamos que siga hacia delante-: parón de las reformas en marcha; caída general de la calidad de la enseñanza; aparición de

nuevos elementos de desigualdad en el sistema educativo, tanto a nivel social como entre Comunidades Autónomas; progresivo deterioro de la situación de la Enseñanza pública y, en paralelo, potenciación de una enseñanza privada basada en la falta de participación y el descontrol.

Todo ello promovido, alentado y auspiciado por el entorno social, político e ideológico de la derecha más conservadora, representada por las patronales de la enseñanza privada y la Conferencia Episcopal.

Puestas así las cosas, sólo cabe que los sectores progresistas de la Enseñanza, que históricamente hemos defendido una Enseñanza Pública de calidad para la inmensa mayoría de la sociedad, pluralista, laica y compensadora de las desigualdades, tomemos la iniciativa e imponamos un cambio de rumbo en estas políticas.

Si no los paramos ahora, después será más difícil.